DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 810/2021-CR, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA EL NUMERAL 61.3 DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 30220, LEY UNIVERSITARIA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
03 FEB. 2023
RECIBIDO
Firma: Hora: 16:50

Señor Presidente:

Ha sido remitida para estudio y dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte la siguiente iniciativa legislativa:

PROYECTO DE LEY	PROPONENTE	GRUPO PARLAMENTARIO	DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA
810/2021-CR	Eduardo Salhuana Cavides	Alianza Para el Progreso	Proyecto de Ley que modifica el numeral 61.3 del artículo 61 de la Ley 30220, Ley Universitaria.

El presente dictamen[1] fue aprobado por mayoría en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, celebrada el 11 de enero de 2023.

Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Izaga, Mori Celis, Castillo Rivas[2], María del Pilar Cordero Jon Tay, Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Rivas Chacara, Chiabra León, Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina y Sánchez Palomino[3] (miembros titulares).

Congresista que votó en abstención: Elías Ávalos (miembro titular).

I. SITUACIÓN PROCESAL

1.1. Antecedentes procesales

El proyecto de ley fue presentado e ingresado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte conforme se aprecia en el detalle siguiente:

PROYECTO DE LEY	FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA DE INGRESO	COMISIÓN
810/2021-CR	19/11/2021	24/11/2021	Educación, Juventud y Deporte

[1] Finalizada la sesión, el congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, mediante Oficio 482-2022-2023/JAMM-CR, del 13 de enero de 2023, dejó constancia de su voto en contra.
[2] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[3] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

La iniciativa legislativa materia del presente dictamen cumple con los requisitos generales y específicos señalados en los artículos 75, 76 y 77 del Reglamento del Congreso de la República.

1.2. Contenido de la iniciativa y exposición del problema que se pretende resolver

El Proyecto de Ley 810/2021-CR busca modificar el numeral 61.3 del artículo 61 de la Ley 30220, Ley Universitaria, con la finalidad de incorporar como requisito para ser elegido rector de una universidad el haber obtenido el grado académico de doctor de manera semipresencial y a distancia, así como el tener acreditada una trayectoria en la investigación científica.

Si bien la exposición de motivos de esta iniciativa legislativa sólo describe la existencia de una antinomia jurídica cuya superación persigue la aprobación de dicha norma, no se advierte la descripción de una determinada problemática social que subyazca a tal antinomia. Estamos, pues, ante un proyecto de ley que pretende homogenizar el tratamiento de los requisitos para ser elegido rector de una universidad con las modalidades de enseñanza universitaria existentes.

De acuerdo con la referida exposición de motivos, en el año 2018 se modificó la Ley 30220, Ley Universitaria, a fin de incorporar las modalidades semipresencial y a distancia como nuevas formas de cursar estudios universitarios de pregrado; sin embargo, tal modificación no permitió que los estudios de posgrado pudieran llevarse a través de las mencionadas modalidades, imposibilidad que dejo de existir el 10 de mayo de 2020, fecha en que se publicó en el Diario Oficial "El Peruano", a propósito de la entrada en vigencia del Estado de Emergencia a nivel nacional, el Decreto Legislativo 1496, el cual modificó a ese respecto el artículo 47 de la citada Ley Universitaria.

En este nuevo marco normativo la proposición legal bajo comentario subraya la existencia de una contradicción entre aquel y la exigencia del requisito, entre otros, de haber obtenido el grado de doctor de manera presencial para poder ser elegido rector de una universidad, establecida en el artículo 61 de la Ley 30220, Ley Universitaria. Así, existiría una antinomia jurídica entre, por un lado, los artículos 39 y 47, y, por otro, el artículo 61 de la mencionada ley, cuya superación debe ser abordada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

Finalmente, como argumentos que justificarían el objeto de la iniciativa normativa se menciona el caso de la regulación que al respecto presenta la Universidad de Carabobo (Venezuela), así como diversos autores que sostienen la importancia de la modalidad virtual de la enseñanza universitaria, resaltándose que en el contexto peruano el índice de inscripción del grado de doctor en el año 2021, tanto en las universidades públicas como privadas, habría descendido respecto del año 2018.

1.3. Opiniones solicitadas y recibidas

1.3.1 Opiniones solicitadas

Se efectuaron pedidos de opinión a las siguientes instituciones:

PROYECTO DE LEY	OFICIO	INSTITUCIÓN	FECHA
810/2021-CR	343-2021-2022	Ministerio de Educación	10/10/2021
	344-2021-2022	Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria	10/10/2021

1.3.2 Sumilla de las opiniones ciudadanas y técnicas recibidas

1.3.2.1. Opinión institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, mediante el Oficio N° 061-2022-SUNEDU-02, de fecha 27 de enero de 2022, remitió su opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 810/2021-CR, concluyendo que la citada iniciativa legislativa presenta determinadas observaciones que deberían ser merituadas a fin de determinar su viabilidad. A continuación se reseñan las principales observaciones:

- Si bien en la exposición de motivos se señala como sustento las modificaciones a la Ley 30220, Ley Universitaria, realizada por el Decreto Legislativo 1496, el proyecto de ley no toma en consideración que lo dispuesto por dicha norma tiene carácter transitorio y excepcional al estar su promulgación condicionada al contexto de pandemia originado por la pandemia del Covid-19.

- El razonamiento anterior se refuerza si se tiene en consideración que la naturaleza excepcional y transitoria del citado Decreto Legislativo1496 no guarda relación con el fin de la existencia de los requisitos para ser elegido rector: garantizar la idoneidad de la persona encargada de la dirección, la conducción y la gestión del gobierno universitario.

- Si bien la iniciativa normativa propone la inclusión como requisito para ser rector el que este tuviera "trayectoria en investigación científica", aquella no precisa los alcances de dicha frase; tampoco se habría realizado un análisis de cómo es que la actual regulación de los artículo 39 y 47 de la Ley 30220, Ley Universitaria, sería insuficiente para cautelar los fines del cargo de rector antes mencionados.

- Finalmente, aunque se cita normativa extranjera el proyecto de ley no explica por qué ella debería replicarse en nuestro país, referencia que se oscurece aún más si se toma en consideración que la iniciativa legal bajo comentario tampoco describe la problemática que se pretende resolver, contraviniendo de esta manera lo estipulado en el Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República.

1.3.2.2. Opinión institucional del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, mediante el Oficio N° 88-2022-MINEDU/SG, de fecha 03 de febrero de 2022, concluye que el proyecto de ley no resulta viable por las siguientes razones:

- La naturaleza del cargo de rector, así como la importancia de sus funciones, determinan que el grado de doctor al que alude el proyecto de ley sea obtenido en una universidad licenciada. Sin embargo, dicha iniciativa legislativa no realiza tal referencia.

- Si bien la propuesta normativa guardaría relación con lo establecido en el Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano, aprobado por la Resolución Ministerial N° 368-2021-MINEDU, no toma en consideración lo señalado en el Reglamento Nacional de Grados y Títulos, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 09-2015-SUNEDU/CD, mediante la cual se promueve el uso de entornos virtuales de aprendizaje y de la cual se desprende la necesidad de la elaboración de requerimientos específicos y objetivos de acreditación de la trayectoria en investigación científica.

- En ese sentido, teniendo en cuenta la probabilidad de que, luego de la eventual aprobación de este proyecto de ley, las solicitudes de modificación de licencia de los programas de doctorado aumentarían, se debe establecer una línea de base respecto de la cantidad de programas de doctorado con modalidad semipresencial y a distancia, de manera que se pueda evaluar el impacto de aquella.

- En cuanto al extremo de la propuesta de que incorporar la trayectoria en investigación científica como requisito para ser rector, la exposición de motivos, por un lado, no ha considerado lo señalado en el Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – Reglamento RENACYT, y, por otro, no ha analizado la compatibilidad entre dicho requisito y la misión y las funciones principales del cargo de rector de una universidad.

II. MARCO NORMATIVO

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Convención Americana de Derechos Humanos
- Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Observación General 03. La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto) (Quinto período de sesiones, 1990
- Constitución Política del Perú.
- Ley 28044, Ley General de Educación
- Ley 30220, Ley Universitaria
- Decreto Legislativo N° 1496, Decreto Legislativo que establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional
- Resolución Viceministerial N° 015-2022-MINEDU, resolución que aprueba las "Orientaciones para la implementación del retorno gradual a la presencialidad y/o semipresencialidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19".
- Resolución Viceministerial N° 076-2022-MINEDU, resolución que dispone que las universidades públicas y privadas, así como las escuelas de posgrado, retornan a la prestación del servicio educativo, según la modalidad autorizada en su licencia institucional, a partir del segundo semestre académico de 2022.
- Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU-CD, resolución que aprobó las "Medidas de Simplificación Administrativa para el Licenciamiento Institucional" y el "Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional".
- Resolución del Consejo Directivo N° 105-2020-SUNEDU/CD, resolución que aprobó las disposiciones para la prestación del servicio educativo superior universitario bajo las modalidades semipresencial y a distancia, el Modelo de Licenciamiento de programas en las modalidades semipresencial y a distancia
- Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, resolución que aprobó los "Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19".
- Resolución de Consejo Directivo N° 121-2021-SUNEDU/CD, que dispone la suspensión de la obligatoriedad de iniciar un procedimiento de modificación de licencia institucional, en los supuestos en que se pretenda cambiar la modalidad de un programa licenciado a una distinta a la presencial, en los locales ya autorizados para la prestación de estos; y dictan otras disposiciones.

III. ANÁLISIS

3.1. Sobre la realidad problemática de los estudios de doctorado en el Perú

a. Sobre la realidad de la educación universitaria del Perú después de la pandemia generada por el Covid-19

La reforma universitaria es un proceso que se materializa a través de la culminación progresiva de varias etapas. La primera, la del licenciamiento institucional, ha culminado, según la propia Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria —en adelante, SUNEDU—, el año 2021 y de manera exitosa. Así, dicha entidad sostiene:

> "El licenciamiento de instituciones universitarias es la primera finalidad que la Ley Universitaria n° 30220 establece para la Superintendencia nacional de educación superior universitaria – Sunedu. (...) la Sunedu desarrolló un marco específico denominado Modelo de Licenciamiento Institucional, y se verificó el cumplimiento de ocho condiciones básicas de calidad en las universidades y escuelas de posgrado. El primer licenciamiento institucional fue un procedimiento pionero en el país, que marcó la ruta para el aseguramiento de la calidad universitaria, aunque no es la única función que cumple la Superintendencia."[4]

Entre las acciones inmediatas que la SUNEDU se ha propuesto realizar como parte integrante de la segunda etapa de la reforma tenemos al licenciamiento de programas en las modalidades semipresencial y a distancia, mediante el cual se evalúan las condiciones mínimas para su implementación entre las cuales se encuentran la de contar con una propuesta formativa, con docentes calificados, con un soporte académico- administrativo básico, con infraestructura tecnológica y física, y con estrategias y mecanismos para el desarrollo de la modalidad semipresencial.[5]

Así, como primera conclusión tenemos que la SUNEDU tiene, entre sus prioridades, en la segunda etapa de la reforma universitaria llevar a cabo el licenciamiento de las modalidades semipresencial y a distancia en general, en

[4] Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. III Informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria: Lima, diciembre, 2021, p. 33.

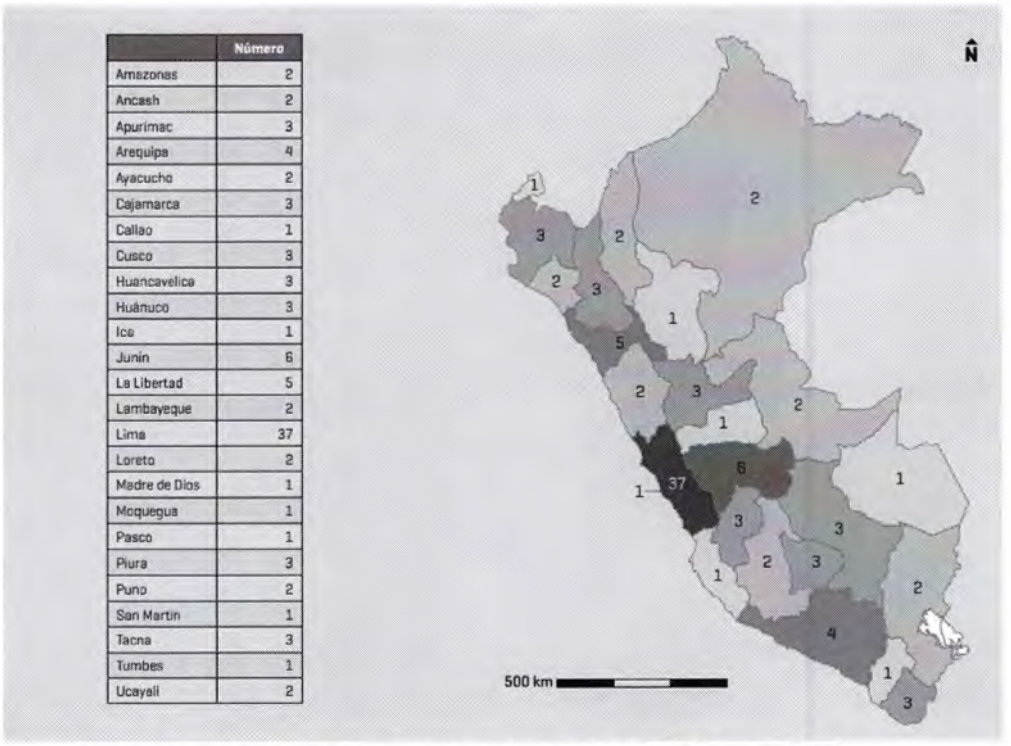
[5] Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. III Informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria: Lima, diciembre, 2021, p. 34.

virtud del Modelo de Licenciamiento de programas en las modalidades semipresencial y a distancia para la educación universitaria, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 105-2020-SUNEDU/CD.

De otro lado, corresponde ahora determinar el número de universidades licenciadas a nivel nacional. De acuerdo con la información elaborada por la SUNEDU, a finales del año 2021 existen en el Perú 94 instituciones licenciadas, de las cuales 46 son públicas (48,9%) mientras que las privadas asociativas sumaban 29 (30,9%) y las privadas societarias eran 19 (20,2%). La distribución de dichas universidades por departamento se muestra en el siguiente gráfico:

Instituciones con licencia otorgada, según departamento, 2021
(número)

	Número
Amazonas	2
Ancash	2
Apurímac	3
Arequipa	4
Ayacucho	2
Cajamarca	3
Callao	1
Cusco	3
Huancavelica	3
Huánuco	3
Ica	1
Junín	6
La Libertad	5
Lambayeque	2
Lima	37
Loreto	2
Madre de Dios	1
Moquegua	1
Pasco	1
Piura	3
Puno	2
San Martín	1
Tacna	3
Tumbes	1
Ucayali	2



Nota: Se consideran universidades y escuelas de posgrado con licencia otorgada según la ubicación de la sede institucional.
Información registrada al 1/7/2021.
Fuente: SIU. Sunedu. 2021.

Como se aprecia en el gráfico anterior la mayor concentración de universidades licenciadas se encuentra en el departamento de Lima. Llama la atención que los departamentos de Madre de Dios, Ica, Tumbes, Moquegua, San Martín y Pasco sólo haya una universidad licenciada para cada uno de ellos.

Una mirada más aguda a esta realidad permite advertir en qué departamentos hay presencia de universidades asociativas, societarias y públicas licenciadas. A continuación, se presenta un gráfico donde se detalla dicha información:

Instituciones privadas asociativas con licencia otorgada, según departamento, 2021
[número]



Instituciones privadas societarias con licencia otorgada, según departamento, 2021
[número]



Instituciones públicas con licencia otorgada, según departamento, 2021
[número]



Nota: Se consideran universidades y escuelas de posgrado con licencia otorgada según la ubicación de la sede institucional. Información registrada al 1/7/2021.
Fuente: SIU, Sunedu, 2021.

Del gráfico anterior se desprenden que: i) 11 departamentos cuentan con oferta privada asociativa, donde la mayor parte de universidades privadas asociativas (16) se encuentran en el departamento de Lima, seguido por Arequipa (3) y La Libertad (2); ii) 06 cuentan con oferta privada societaria, donde Lima es sede de 12 instituciones privadas societarias mientras que en Junín y La Libertad hay 02 y en Lambayeque, Ica y Tacna sólo hay 01; y, iii) la mayor concentración de universidades públicas la tiene Lima con 09 universidades, mientras que Junín y Cajamarca tienen 03 cada uno y el resto de departamentos (incluida la Provincia Constitucional del Callao), tienen en promedio 01 y 02 universidades.

Entonces como segunda conclusión podemos señalar que la presencia de universidades públicas en el Perú es mayor que la de las privadas (asociativas o societarias), llegando a existir departamentos donde sólo existen universidades públicas.

Por tanto, en este apartado tenemos dos conclusiones relevantes para el presente dictamen:

- La SUNEDU tiene, entre sus prioridades, en la segunda etapa de la reforma universitaria implementar o potenciar el modelo de licenciamiento de las modalidades semipresencial y a distancia.

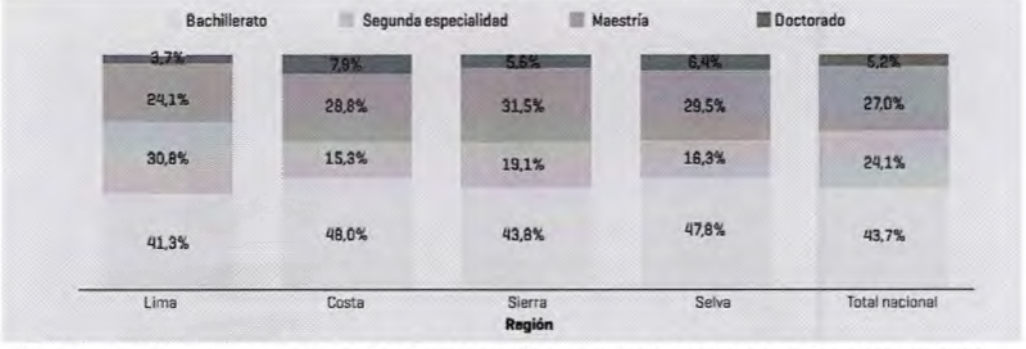
- La presencia de universidades públicas en el Perú es mayor que la de las privadas (asociativas o societarias), llegando a existir departamentos donde sólo existen universidades públicas.

b. Sobre la situación de la educación universitaria de posgrado (doctorado) en el Perú

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa —en adelante, SINAEACE— señala que una de las características principales de los estudios de posgrado es la inevitable falta de tiempo con la que cuenta el estudiante, pues "a mayor nivel, hay menos disponibilidad de tiempo. Esta modalidad debilita la calidad."[6] *Contrario sensu*, se desprende que en una educación superior universitaria de nivel de posgrado que aspira a la calidad los controles de excelencia deben ser más estrictos.

La SUNEDU divide las unidades de análisis en cuatro, según su homogeneidad territorial y, sobre todo, de acuerdo con la densidad poblacional, pues estos dos factores determinan, *grosso modo*, la oferta educativa en general y la de posgrado en particular. Así, tenemos que existen cuatro grupos de oferta de posgrado en el Perú: Lima, la Costa, la Sierra y la Selva, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Oferta académica de instituciones con licencia otorgada por nivel de estudios, según región y total nacional, 2021
(porcentaje de programas)



Nota: La agrupación de programas se hizo a partir de la ubicación geográfica exacta del local en el que se impartía. Se consideran programas de universidades y escuelas de posgrado con licencia otorgada con ubicación y campo de la educación uno a nueve (INEI y Sunedu, 2018). Un programa en más de un local de la institución ofertante se contabiliza más de una vez. Información actualizada al 1/1/2021.
Fuente: SIU, Sunedu, 2021.

En cuanto a la oferta académica por nivel de estudios, el gráfico anterior muestra que a nivel nacional el 43,7% corresponde a la oferta de bachillerato, el 24,1%, a la de segunda especialidad; el 27,0%, a la de maestría; y sólo el 5,2%, al de

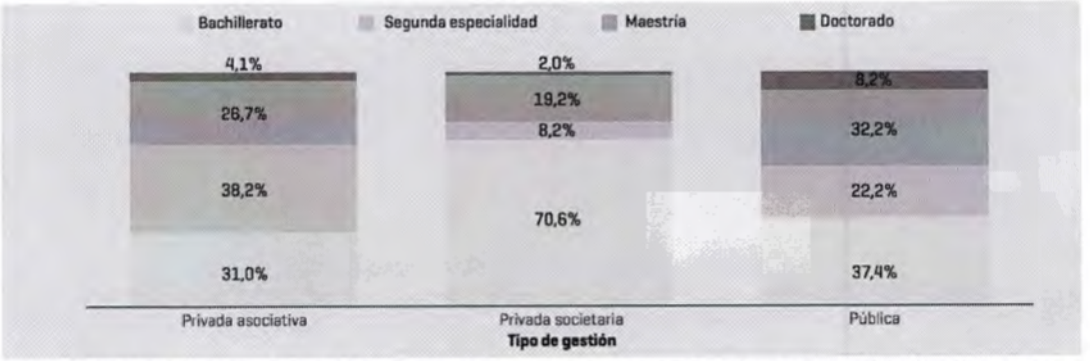
[6] Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Modelo de Calidad para la Acreditación de Programas de Estudios de Posgrado —Maestrías y Doctorados—. Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa: Lima, noviembre de 2022, acápite 2, in fine.

doctorado. Pero la oferta académica de doctorado a nivel regional no experimenta variaciones considerables: en Lima la oferta es de 3.7% respecto del total de su oferta académica, mientras que en la costa, la sierra y la selva son de 7,9%, 5,6% y 6,4% respectivamente.

Respecto a la oferta académica de doctorado según la naturaleza del tipo de gestión de la universidad que la imparte, sí encontramos diferencias importantes. En efecto, mientras que en el caso de las universidades públicas la oferta de doctorado es de 8.2% respecto del total de su oferta académica, las universidades privadas asociativas y las universidades privadas societarias ofertan el 4.1% y el 2,0%, respectivamente.

Oferta académica de instituciones con licencia otorgada por nivel de estudios, según tipo de gestión, 2021

(porcentaje de programas)



Nota: Se consideran programas de universidades y escuelas de posgrado con licencia otorgada con ubicación y campo de la educación uno a nueve (INEI y Sunedu, 2018). Un programa en más de un local de la institución ofertante se contabiliza más de una vez. Información actualizada al 1/7/2021.
Fuente: SIU, Sunedu, 2021.

De acuerdo con la propia SUNEDU, las universidades que ofrecían el mayor número de programas de doctorado fueron las Universidades César Vallejo y Nacional Mayor de San Marcos, ambas con 31 programas, y la Universidad Nacional de Trujillo, con 25 programas.

De otro lado, tenemos la información relativa a la oferta académica de programas de doctorado de acuerdo con el campo o materia de educación impartida. Así, del gráfico siguiente se aprecia que los programas doctorales en las disciplinas de las ciencias administrativas y de Derecho representan el 27,3% respecto del total de la oferta doctoral. Otras disciplinas que se destacan por su número de programas académicos doctorales son los relativos a las ciencias naturales y matemáticas, así como los relativos a las ciencias de la salud, las ciencias sociales y educación, con 17,7%, 13,8%, 12,5% y 12,2%, respectivamente.



Nota: Se consideran programas de universidades y escuelas de posgrado con licencia otorgada con ubicación y campo de la educación uno a nueve (INEI y Sunedu, 2018). Un programa en más de un local de la institución ofertante se contabiliza más de una vez.
Información actualizada al 1/7/2021.
Fuente: SIU, Sunedu, 2021.

Por lo tanto, son tres las conclusiones de este apartado:

- Del total de la oferta educativa universitaria la oferta de programas doctorales es incipiente. Así, a nivel nacional dicha oferta es de 5,2%. Pero ella también es incipiente respecto de la totalidad de cada región: en Lima es de 3.7% y en la costa, la sierra y la selva son de 7,9%, 5,6% y 6,4% respectivamente.

- La oferta de doctorado en las universidades públicas es mayor que en las privadas. Así, en el primer caso es de 8.2% respecto del total de su oferta académica, mientras que en las universidades privadas asociativas y en las universidades privadas societarias son de 4.1% y de 2,0%, respectivamente.

- La oferta de programas de educación ocupa un porcentaje importante respecto de la totalidad de la oferta doctoral. La oferta doctoral más extendida es la relativa a los programas doctorales de ciencias administrativas y de Derecho (27,3%). Otros programas que sobresalen por su número son los relativos a las ciencias naturales y matemáticas (17,7%), así como los relativos a las ciencias de la salud (13,8%), las ciencias sociales (12,5%) y educación (12,2%).

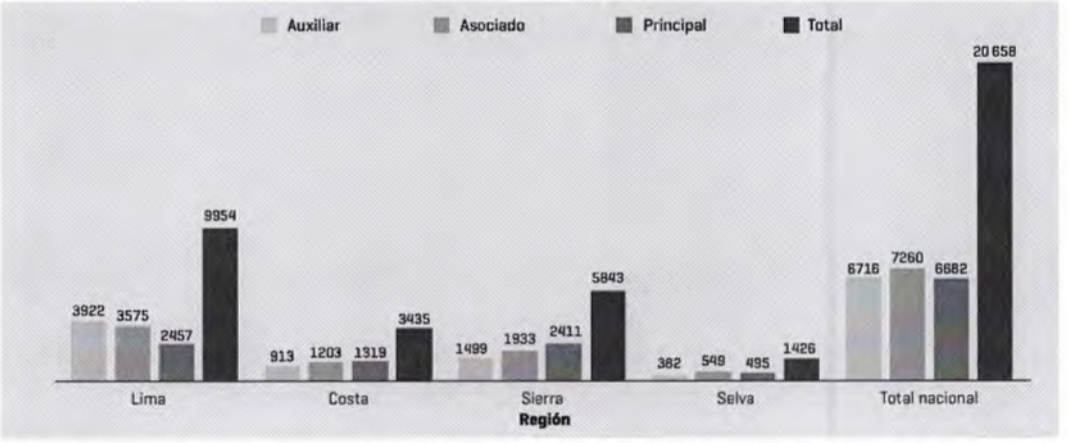
c) Sobre la situación académico-profesional de los docentes universitarios

El artículo 80 de la Ley 30220, Ley Universitaria, establece la regulación de los docentes, los mismos que pueden clasificarse en ordinarios, extraordinarios y contratados. En el primer grupo se dividen en principales, asociados y auxiliares,

mientras que en el segundo se dividen en eméritos, honorarios y similares dignidades. Los contratados son los que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y condiciones que fija el correspondiente contrato.

Sobre la base de esta clasificación, a continuación, se presenta un gráfico donde se muestra el número de docentes según cada categoría a nivel nacional en cada una de las cinco unidades de análisis (regiones) que utiliza la SUNEDU.

Puestos docentes por categoría, según región y total nacional, 2020
(número)

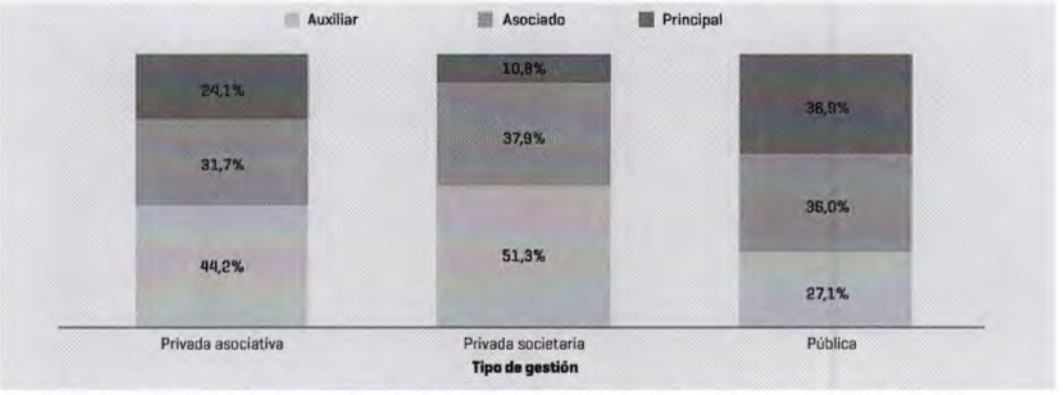


Nota: Se considera la ubicación de la sede institucional. Se cuenta con información de 90 universidades y dos escuelas de posgrado con licencia otorgada. Solo se consideran docentes ordinarios. La información corresponde al semestre 2020-1.
Fuente: SIU, Sunedu, 2020.

Del cuadro anterior se desprende que a nivel nacional existen 6682 profesores principales de un total de 20,658 docentes ordinarios, tanto en las universidades públicas como en las privadas. En Lima hay 2457 profesores principales de un total de 9954. En segundo y tercer lugar tenemos a las regiones de la sierra y de la costa con 2411 y 1319 profesores ordinarios principales de un total de 5842 y 3435 respectivamente. Finalmente, tenemos a la región de la selva con 495 profesores de un total de 1426. La idea fuerza que debe resaltarse aquí es que a nivel nacional el número de profesores principales es aproximadamente un tercio del total de profesores ordinarios.

De otro lado, presentamos un gráfico que muestra el porcentaje de los docentes ordinarios por categoría según el tipo de gestión institucional de la universidad. Una primera información que este gráfico proporciona es que las universidades públicas tienen una mayor cantidad de profesores principales que las privadas, tal como se aprecia a continuación:

Puestos docentes por categoría, según tipo de gestión, 2020
[porcentaje]

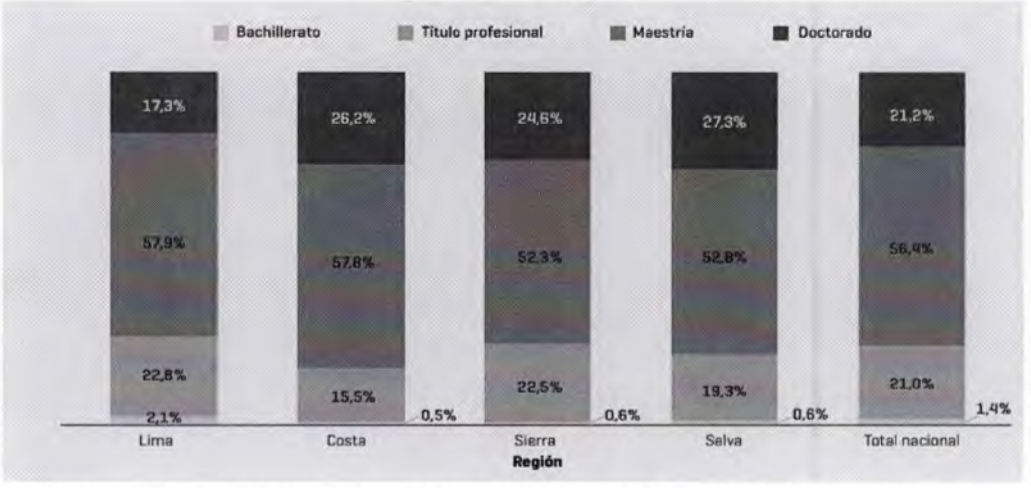


Nota: Se cuenta con información de 90 universidades y dos escuelas de posgrado con licencia otorgada. Solo se consideran docentes ordinarios. La información corresponde al semestre 2020-1.
Fuente: SIU, Sunedu, 2020.

En efecto, mientras que el 36,9% de los profesores de las universidades públicas son principales, el número de profesores principales en las universidades privadas asociativas es de 24,1%. Sin embargo, un caso que nos llama la atención es que en las universidades privadas societarias sólo el 10,8% de los profesores son principales.

Una información distinta nos ofrece el siguiente gráfico que muestra el porcentaje de profesores por su grado académico, según el ámbito geográfico de la sede institucional. Como se apreciará a continuación, del total de profesores a nivel nacional sólo el 21,2% tiene el grado de doctor. Cabe resaltar sin embargo que en la región de la selva es donde existen más docentes con grado de doctor respecto del total de profesores de dicha región mientras que la región Lima, sorpresivamente, es la que cuenta con menos profesores con grado de doctor.

Puestos docentes por grado académico, según región y total nacional, 2020
(porcentaje)



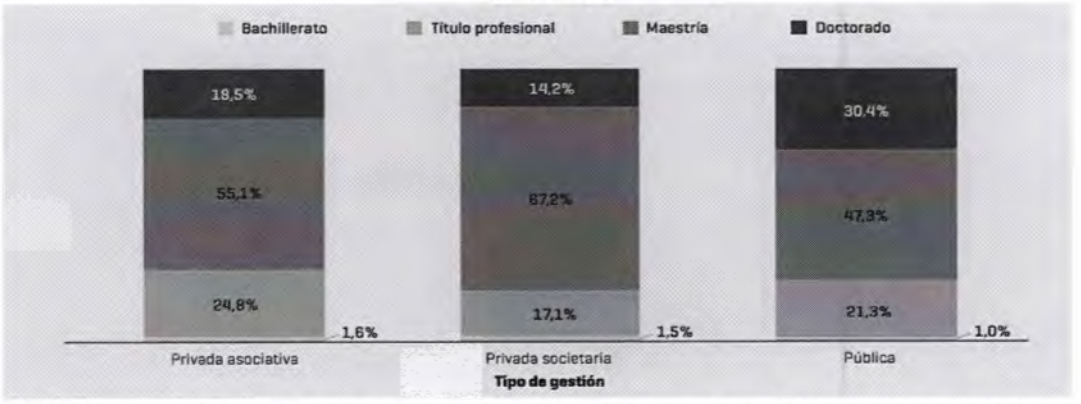
Nota: Se considera la ubicación de la sede institucional. Se cuenta con información de 90 universidades y dos escuelas de posgrado con licencia otorgada. Se considera el máximo grado alcanzado por el docente. No se considera grados de segunda especialidad.
La información corresponde al semestre 2020-1.
Fuente: SIU, Sunedu, 2020.

Tal como se aprecia del gráfico anterior, Lima tiene 17,3% de profesores con grado de doctor del total de los profesores de dicha región. Por su parte, la costa, la sierra y la selva tienen 26,2%, 24,6% y 27,3% profesores con grado de doctor respecto del total de cada región, respectivamente.

Es preciso resaltar que esta información si bien sugiere que respecto del total de cada región la selva es la que tiene un mayor porcentaje de profesores con grado de doctor, no debe perderse de vista que, desde el punto de vista cuantitativo, Lima la región que tiene más profesores ordinarios en general.

Por otro lado, en cuanto al porcentaje de profesores por grado académico según el tipo de gestión institucional, lo primero que salta a la vista en el siguiente gráfico es que de todas las universidades las públicas tienen el mayor porcentaje de profesores con grado de doctor y las privadas societarias presentan la menor cantidad de este tipo de profesores.

Puestos docentes por grado académico, según tipo de gestión, 2020
(porcentaje)

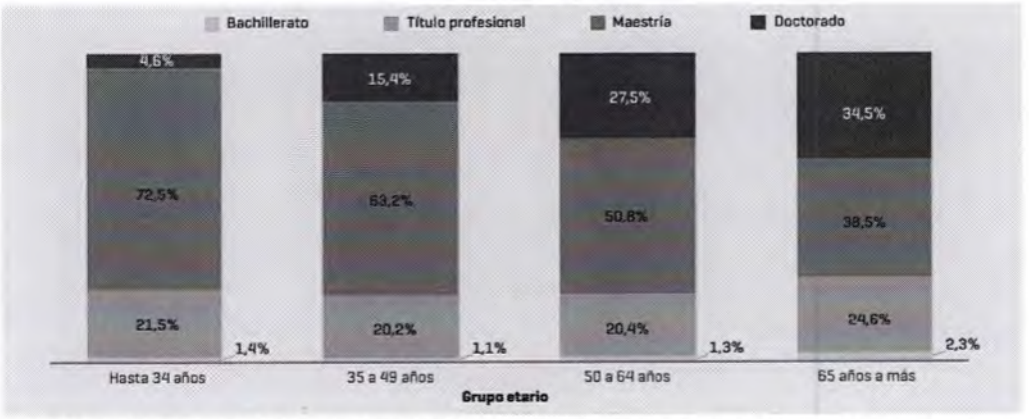


Nota: Se cuenta con información de 90 universidades y dos escuelas de posgrado con licencia otorgada. Se considera el máximo grado alcanzado por el docente. No se considera grados de segunda especialidad. La información corresponde al semestre 2020-1
Fuente: SIU, Sunedu, 2020.

En efecto, tal como se desprende del gráfico anterior el 30,4% de los profesores de las universidades públicas ostentan el grado de doctor mientras que los profesores con dicho grado académico pertenecientes a las universidades privadas asociativas y a las privadas societarias representan el 18,5% y el 13.2% del total de sus profesores respectivamente.

Finalmente, el gráfico siguiente muestra la proporción de puestos ocupados por docentes en función de su grado académico alcanzado y de su edad. Estos datos del año 2020 ponen en evidencia dos situaciones.

Puestos docentes por grado académico, según grupo etario, 2020
(porcentaje)



Nota: Se cuenta con información de 90 universidades y dos escuelas de posgrado con licencia otorgada. Se considera el máximo grado alcanzado por el docente. No se considera grados de segunda especialidad. La información corresponde al semestre 2020-1
Fuente: SIU, Sunedu, 2020.

Del gráfico anterior se puede deducir que mientras más avanzada sea la edad del docente mayor es el grado académico alcanzado. Asimismo, en el grupo

etario constituido por profesores de hasta 34 años los que tienen el grado de doctor sólo son 4,6% del total de docentes de dicha edad. Por su parte, en el grupo etario de profesores de entre 35 a 49 años 15,4% de ellos ostentan el referido grado académico. En el caso de los docentes de entre 50 a 64 años el 27,5% de ellos son doctores. Finalmente, el grupo etario que tiene el 34,5% de profesores con grado de doctor es el de 65 años a más.

Por lo tanto, son siete las conclusiones de este apartado:

- A nivel nacional existen 6682 profesores principales de un total de 20,658 docentes ordinarios, tanto en las universidades públicas como en las privadas.
- A nivel nacional el número de profesores principales es aproximadamente un tercio del total de profesores ordinarios.
- Las universidades públicas tienen una mayor cantidad de profesores principales que las privadas.
- En las universidades privadas societarias sólo el 10,8% de los profesores son principales.
- Del total de profesores a nivel nacional sólo el 21,2% tiene el grado de doctor.
- Las universidades públicas tienen el mayor porcentaje de profesores con grado de doctor y las privadas societarias presentan la menor cantidad de este tipo de profesores.
- Mientras más avanzada sea la edad del docente mayor es el grado académico alcanzado, tal como se comprueba en el caso del grupo etario de 65 años a más que tiene el 34,5% de profesores con grado de doctor.

A manera de conclusión de esta primera parte de la exposición de motivos del presente dictamen tenemos que el panorama actual del doctorado en el Perú, sea desde la perspectiva de la oferta, o sea desde el punto de vista de la naturaleza del cargo de los docentes, constituye una realidad compleja cuya aproximación implica no sólo una labor casuística sino también sistematizadora.

En efecto, las distintas realidades regionales, así como la diferente naturaleza de la gestión institucional de las universidades, aunado a las limitaciones de los recursos humanos debidamente calificados para la impartición de los programas doctorales, determinan, de alguna manera, la oferta educativa en este nivel de posgrado.

Dicho de otra manera, el acceso, la realización y la culminación exitosa de los estudios doctorales aparecen como partes inseparables del mecanismo de investigación por excelencia mediante el cual la ciencia amplía sus fronteras y se crea conocimiento, mecanismo que en el Perú, a la luz de las características de nuestra realidad educativa, se convierte en un genuino reto o desafío de cara

al mantenimiento de la calidad educativa. Su éxito no puede, pues, ser reducido a una mera aproximación legal.

3.2. Las consecuencias no previstas de la propuesta legislativa bajo comentario

Como mencionamos *supra*, el Proyecto de Ley 810/2021-CR busca modificar el numeral 61.3 del artículo 61 de la Ley 30220, Ley Universitaria, con la finalidad de incorporar como requisito para ser elegido rector de una universidad el haber obtenido el grado académico de doctor de manera semipresencial y a distancia, así como el tener acreditada una trayectoria en la investigación científica.

A continuación, presentamos un cuadro comparativo de la redacción vigente del artículo 61 y el texto propuesto por la mencionada iniciativa legislativa:

Redacción vigente	Redacción propuesta por el Proyecto de Ley 810/2021-CR
Artículo 61. Requisitos para ser Rector (...) 61.3. Tener grado académico de Doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales.	Artículo 61. Requisitos para ser Rector (...) 61.3. Tener grado académico de Doctor, el mismo que debe haber sido obtenido **a través de las modalidades presencial, semipresencial o a distancias, acreditando trayectoria en investigación científica.**

Del texto de la fórmula legal, así como de la exposición de motivos de la iniciativa normativa bajo análisis, se desprende que el referido numeral 63.1 es el único objeto de modificación legislativa. Sin embargo, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha identificado otros artículos que se verían afectados de aprobarse la citada propuesta legal.

En efecto, desde un punto de vista de coherencia normativa, esta comisión no puede dejar de uniformizar en todo el articulado de le Ley 302220, Ley Universitaria, las referencias a los requisitos de obtención del grado de doctor de manera presencial en todos los supuestos. Así, esta comisión ha encontrado que, de aprobarse la propuesta legislativa bajo comentario, también deberían modificarse las siguientes normas de la citada Ley 30220:

> "Artículo 20. Superintendente de la SUNEDU
> (...)
> 20.1.2 Tener el grado académico de Doctor, habiéndolo obtenido con estudios presenciales y contar con no menos de diez años de experiencia profesional."
>
> "Artículo 64. Requisitos para ser Vicerrector
> Para ser Vicerrector se requiere cumplir con los mismos requisitos establecidos para el cargo de Rector."

> "Artículo 69. Requisitos para ser Decano
> Son requisitos para ser Decano:
> (...)
> 69.2 Ser docente en la categoría de principal en el Perú o en el extranjero, con no menos de tres (3) años en la categoría.
> 69.3 Tener grado de Doctor o Maestro en su especialidad, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales. (...)"
>
> "Artículo 83. Admisión y promoción en la carrera docente
> (...)
> La promoción de la carrera docente es la siguiente:
> 83.1 Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de Doctor el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales, y haber sido nombrado antes como profesor asociado. (...)"

De las citas anteriores se desprende que si bien el Proyecto de Ley 810/2021-CR busca modificar el numeral 61.3 del artículo 61 de la Ley 30220, Ley Universitaria, la aplicación de las reglas de coherencia y lógica por parte de esta comisión llevarían a modificar los mencionados cuatro artículos. Sin embargo, de ser este el caso la iniciativa legislativa bajo comentario no se ha pronunciado sobre las razones que fundamentarían esta suerte de "efecto dominó" en el articulado de la referida Ley 30220, a pesar de que uno de los requisitos de todo proyecto de ley es desarrollar los efectos legislativos de la entrada en vigencia de la norma que se propone.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta evidente que las consecuencias legales del proyecto de ley bajo análisis han excedido con creces su objeto, tanto en términos de modificación de normas como en ausencia de fundamentación fáctica y jurídica, por lo que su aprobación requiere no sólo una profunda reflexión sino, sobre todo, contar con otros elementos (opiniones institucionales) que permitan la formación de un juicio acorde con la realidad educativa peruana.

3.3. Sobre la educación a distancia introducida mediante el Decreto Legislativo N° 1496

El proyecto de ley bajo comentario sostiene que la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1496 supuso la apertura de la educación universitaria a las modalidades semipresencial y a distancia. Es decir, de acuerdo con esta propuesta legal, antes de la entrada en vigencia de esta ley no había la posibilidad de que una universidad pudiera licenciar un determinado programa en la modalidad a distancia, por ejemplo.

De ahí que —siempre siguiendo el razonamiento del proyecto de ley— cuando el Decreto Legislativo N° 1496 introdujo la posibilidad de que la educación universitaria se dicte de manera semipresencial y a distancia, generando la necesidad de armonizar el ordenamiento jurídico para que tales modalidades puedan cobrar verdadera vigencia. Sin embargo, tanto esta afirmación como el razonamiento son errados.

En efecto, el artículo 27 de la Ley 28044, Ley General de Educación, promulgada en el año 2003, y aplicable a la educación superior, ya preveía en su redacción original la educación a distancia:

> "Artículo 27.- La Educación a Distancia
> La Educación a Distancia es una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del Sistema Educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia.
> Esta modalidad tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas. Contribuye a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje."

Adviértase que la cita señala expresamente que la educación a distancia es aplicable a todas las etapas del sistema educativo, de acuerdo con la normatividad de la materia. Esto quiere decir que la ley otorga discrecionalidad al legislador para que este, conforme a sus atribuciones, pueda regular mediante leyes especiales la forma en que dicha educación a distancia, de ser el caso, deba aplicarse.

Este fue precisamente el caso de la Ley 30220, Ley Universitaria, la cual reguló expresamente determinados supuestos de hecho donde, de acuerdo con la racionalidad inherente a la orientación de la reforma universitaria, correspondía la aplicación exclusiva de la educación presencial, materializados en el requisito de haber obtenido el grado de doctor de manera presencial, descartando de esta manera la aplicación de la norma descrita en el mencionado artículo 27 de la Ley 28044. De esta manera, queda claro que la opción legislativa por la obtención del grado de doctor de manera presencial en determinados supuestos de la Ley 302220, Ley Universitaria, es el resultado de un proceso de toma de decisiones multipartidario a lo largo del procedimiento legislativo.

Es en este contexto normativo que debe comprenderse el contenido del Decreto Legislativo N° 1496, el cual, tal como lo señala su propia exposición de motivos, obedece a la crisis del sistema educativo en general caracterizado por la

paralización de las clases presenciales y la necesidad de su continuidad. Así, la mencionada exposición de motivos señala:

> "En atención al estado de Emergencia Sanitaria a nival nacional, resulta urgente tomar medidas necesarias para mitigar los posibles efectos perjudiciales, tanto inmediato como a largo plazo, derivados del riesgo de suspensión de la presencialidad. Cabe indicar que dichos efectos perjudiciales recaerían, sobre todo, en el derecho de los estudiantes de las universidades y escuelas de posgrado a continuar gozando del servicio de educación universitaria de forma ininterrumpida y bajo estándares de calidad, los cuales sean similares a los presenciales, ello pese a la ausencia parcial o total de presencialidad en los cursos.
>
> Por ello, resulta necesario reorganizar y precisar el régimen de autorización de las modalidades de estudios, de tal manera que desde dicha normativa se pueda promover la adopción de distintas soluciones ante la ausencia de presencialidad, las cuales permitan afrontar de forma inmediata la emergencia sanitaria y, además, faciliten afrontar las consecuencias a largo plazo de este fenómeno, a través del incremento de la oferta no presencial de programas de estudios universitarios, así como de la expansión de las capacidades institucionales necesarias para afrontar la prestación del servicio de forma remota." [7]

Asimismo, continúa la mencionada exposición de motivos, se prevé dos tipos de estrategias para superar esta crisis:

> "La primera de estas estrategias tendría por objeto asegurar, de forma inmediata, la continuidad de la prestación del servicio educativo a través de adaptaciones de emergencia, las cuales permitirían de forma transitoria y excepcional afrontar cualquier eventual suspensión de la presencialidad que sea ocasionada por las medidas para asegurar la salud pública u otra circunstancia de fuerza mayor derivada del control y prevención del COVID-19,
>
> Cabe indicar que la implementación de este tipo estrategia requiere contar con un marco normativo que habilite a la SUNEDU a realizar el control posterior del servicio educativo universitario ante un espectro amplio de situaciones excepcionales. Dicho control recaería, sobre

[7] Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1496, páginas 19 y 20.

todo, sobre ciertos componentes indispensables para asegurar la continuidad de la impartición de los contenidos previstos en las asignaturas, así como para garantizar el acompañamiento del estudiante y docentes universitarios, en tanto dure el periodo de emergencia sanitaria u otra medida de carácter público que exija la suspensión de actividades en la universidad.

Por otro lado, la segunda estrategia operaría en el mediano plazo, dado que estaría orientada a promover la expansión de la oferta de programas de estudios de forma semi-presencial y no presencial, propiciando que la mayor cantidad de universidades puedan desarrollar las capacidades institucionales necesarias para impartir el servicio educativo universitario bajo dichas modalidades, entre dichas capacidades institucionales se destacan el contar con una plataforma para el aprendizaje virtual en buen estado y con una adecuada conectividad, así como con un plan para la virtualización del servicio educativo, en la que se involucre de forma articulada todas las etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo al tipo de programa de estudios.

Asimismo, se resalta que el desarrollo de estas capacidades institucionales, a su vez, colocan en una mejor situación a la universidad para afrontar una suspensión excepcional de la presencialidad, dado que contarían con plataformas virtuales más robustas, así como con estrategias de educación no presencial ya definidas en sus instrumentos de planificación, por lo que serían menos vulnerables a este tipo de situaciones.

La implementación de esta estrategia requiere que se precise y reorganice el marco normativo para la autorización de la prestación del servicio educativo universitario en todas sus modalidades, otorgando a la SUNEDU la potestad para establecer los porcentajes de virtualidad que definan cada modalidad, así como para evaluarlas en el marco de un procedimiento de licenciamiento, estableciendo las condiciones básicas de calidad que deben ser alcanzadas en cada una de ellas."[8]

De la cita anterior se desprenden tres conclusiones. La primera es que el propio Poder Ejecutivo reconoce la necesidad y la urgencia de establecer mecanismos

[8] Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1496, página 23.

normativos e institucionales que permita la continuidad de la impartición de la educación superior a pesar de la imposibilidad de la prestación de la modalidad presencial ocasionada la vigencia del Estado de Emergencia Sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19.

La segunda es que, en atención a su capacidad institucional y a los procesos internos de política de calidad educativa, divide en dos tipos de estrategias la continuidad de los estudios presenciales: la educación presencial remota (a corto y urgente plazo) y la educación semipresencial y a distancia (a mediano y largo plazo). Cabe precisar que la primera de ellas llegó a su fin el 31 de diciembre de 2022 y la segunda constituye todo un procedimiento en el marco del Modelo de Licenciamiento de programas en las modalidades semipresencial y a distancia para la educación universitaria, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 105-2020-SUNEDU/CD.

Por último, el Poder Ejecutivo, prudentemente, deja para el legislador (reserva de ley), tal como ya venía ocurriendo desde la vigencia de artículo 27 de la Ley 28044, Ley General de Educación, la facultad de complementar o precisar estas modalidades. Es decir, el Poder Ejecutivo es consciente de que el legislador en un momento determinado consideró la exigencia de determinados requisitos (obtención del grado de doctor de manera presencial) en la Ley 30220 y no los modifica, ni mucho menos aduce razones de coherencia normativa.

En consecuencia, el Decreto Legislativo N° 1496 no creó ni introdujo las modalidades distintas a la presencial en nuestro sistema educativo sino que, respondiendo a las necesidades sanitarias y de continuidad educativa, implementó dos tipos de estrategias diferenciadas para asegurar la continuidad de la educación superior, cada una de ellas con diferentes procedimientos, tiempos y estándares. En ningún caso tuvo el objetivo de distorsionar, directa o indirectamente, la voluntad del legislador en cuanto a la determinación de los requisitos para el acceso a ciertos cargos, pues ello no sólo le correspondía al Poder Legislativo, sino que además se trataba —se trata— de una estrategia de mediano y largo plazo.

Por lo tanto, no corresponde a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte realizar los cambios a los requisitos para ser rector sin que hubiera ni siquiera un modelo de calidad de la enseñanza superior universitaria en las modalidades semipresencial y a distancia.

3.4. Sobre la inexistencia de un verdadero problema que resolver

Existen otros argumentos que cuestionan la viabilidad de la propuesta legislativa bajo análisis. En primer lugar, tenemos la inexistencia de un grupo de profesores perjudicados por la redacción actual del artículo 61 de la Ley 302220, Ley Universitaria. En efecto, como ya se ha mencionado *supra*, sólo los profesores

ordinarios principales pueden postular al cargo de rector de una universidad. Así, el mencionado artículo 61 señala:

> "61. Requisitos para ser elegido Rector.
> (...)
> 61.2. Ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o su equivalente en el extranjero, con no menos de cinco (5) años en la categoría."

Pero para ser profesor ordinario principal se requiere haber obtenido el grado de doctor de manera presencial, tal como se advierte del artículo 83 de la Ley 302220, Ley Universitaria:

> "Artículo 83. Admisión y promoción en la carrera docente
> (...)
> La promoción de la carrera docente es la siguiente:
> 83.1 Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de Doctor el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales, y haber sido nombrado antes como profesor asociado. (...)"

Esto quiere decir que actualmente no puede haber un profesor ordinario en la categoría de principal, es decir, un candidato a rector, que no cuente con un grado de doctor obtenido de manera presencial. Aquí cobran relevancia las conclusiones a las que llegamos en los apartados anteriores, según las cuales las universidades las públicas tienen el mayor porcentaje de profesores con grado de doctor y las privadas societarias presentan la menor cantidad de este tipo de profesores y que mientras más avanzada sea la edad del docente mayor es el grado académico alcanzado (por ejemplo, el grupo etario de 65 años a más tiene el 34,5% de profesores con grado de doctor).

Entonces en el supuesto negado de que hubiera algún problema este sería para los docentes ordinarios que no tienen la categoría de principales y además este problema lo sería más para las universidades privadas que para las públicas. Sin embargo, en todos estos hipotéticos casos los docentes siempre deben obtener el grado de doctor de manera presencial, dado que la única manera de ser rector es haber sido profesor ordinario en la categoría de principal, cuyo requisito es precisamente tener un grado de doctor obtenido de manera presencial.

Adicionalmente, debe considerare que los doctorados son, por su propia definición, espacios para la investigación y para la generación de conocimientos. Sin embargo, existe un peligro en la eventual proliferación de programas de doctorado, pues en palabras del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa —en adelante, SINEACE—, "(...) hoy en

día existen programas que pueden estar masificando la oferta de doctorados, sin garantizar su calidad."[9]

Esta observación guarda relación con el Estándar 10 de los programas de estudio de doctorado elaborado por el propio SINEACE según el cual los programas de estudios de doctorado deben contar con lineamientos institucionales y mecanismos que aseguren la pertinencia y la disponibilidad de los recursos para la investigación. Más allá de los recursos humanos, financieros y logísticos, reviste suma importancia la obtención y aseguramiento de recursos bibliográficos (físicos o digitales) con una antigüedad de no menor de cinco años.

A este respecto, el proyecto de ley no menciona si los programas doctorales a distancia que pretende habilitar cumplen con el mencionado estándar en términos de acceso a los recursos bibliográficos. Cabe mencionar que la única manera de asegurar el acceso a la bibliografía en el caso de un doctorado a distancia es la suscripción de convenios interinstitucionales entre la universidad y las bases de datos más prestigiosas a nivel científico.

Es necesario subrayar que no es suficiente —ni siquiera como posibilidad— la obtención de información proveniente de internet para llevar a cabo una investigación doctoral con el rigor académico que le es inherente. Pero si se argumenta que el material bibliográfico se encuentra disponible físicamente en las instalaciones de la universidad y que el doctorando puede acceder a él simplemente yendo al campus universitario entonces pierde sentido la necesidad de implementación de los programas de doctorado a distancia. Esta es precisamente la manera en que se lleva, por lo general, los programas de doctorado presenciales en nuestro país: asistencia al campus universitario sólo determinados días durante el semestre académico y el resto del tiempo es investigación por cuenta del alumno. Con lo que, otra vez, el argumento de la distancia se desvanece.

Finalmente, el Modelo de Licenciamiento de programas en las modalidades semipresencial y a distancia para la educación universitaria, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 105-2020-SUNEDU/CD, constituye el instrumento de gestión adecuado para que cada universidad pueda iniciar un procedimiento de licenciamiento respecto de los programas de doctorado que considere necesarios.

Así, de acuerdo con el Modelo de Calidad para la Acreditación Institucional de Universidades, aprobado mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 000017-2022-CADH, le corresponde a la universidad desarrollar "posgrados

[9] Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Modelo de Calidad para la Acreditación de Programas de Estudios de Posgrado —Maestrías y Doctorados—. Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa: Lima, noviembre de 2022, acápite 4.

acordes en naturaleza y especialidad con los requerimientos del país y las tendencias globales."[10]

Esto tiene concordancia con los señalado en el Lineamiento 11 del Pilar 4 de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que busca asegurar que todas las universidades y sus programas de estudios conducentes a grados y títulos académicos cumplan con condiciones básicas de calidad para obtener y mantener su licenciamiento.

A menara de conclusión, podemos señalar que la presente iniciativa legislativa no es de recibo por las siguientes razones:

- La oferta de doctorado en las universidades públicas es mayor que en las privadas. Entre ellas, la oferta de programas de educación ocupa un porcentaje importante respecto de la totalidad de la oferta doctoral.

- A nivel nacional el número de profesores principales es aproximadamente un tercio del total de profesores ordinarios. Las universidades públicas tienen una mayor cantidad de profesores principales que las privadas. En las universidades privadas societarias sólo el 10,8% de los profesores son principales. Asimismo, las universidades las públicas tienen el mayor porcentaje de profesores con grado de doctor y las privadas societarias presentan la menor cantidad de este tipo de profesores.

- Las consecuencias legales del proyecto de ley bajo análisis han excedido con creces su objeto, tanto en términos de modificación no prevista de normas como en ausencia de fundamentación fáctica y jurídica.

- Actualmente no puede haber un profesor ordinario en la categoría de principal, es decir, un candidato a rector, que no cuente con un grado de doctor obtenido de manera presencial.

- El Estándar 10 de los programas de estudio de doctorado elaborado por el propio SINEACE señala que los programas de estudios de doctorado deben contar con lineamientos institucionales y mecanismos que aseguren la pertinencia y la disponibilidad de los recursos para la investigación. Más allá de los recursos humanos, financieros y logísticos, reviste suma importancia la obtención y aseguramiento de recursos

[10] Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Modelo de Calidad para la Acreditación Institucional de Universidades. Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa: Lima, 2022. Descripción del Estándar 25 del Factor 51. (Articulación con el contexto externo, misión y visión) de la Dimensión 5 (Formación de posgrado).

bibliográficos (físicos o digitales) con una antigüedad de no menor de cinco años.

- Actualmente, por lo general, los programas de doctorado presenciales en nuestro país: asistencia al campus universitario sólo determinados días durante el semestre académico y el resto del tiempo es investigación por cuenta del alumno.

- El Modelo de Licenciamiento de programas en las modalidades semipresencial y a distancia para la educación universitaria, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 105-2020-SUNEDU/CD, constituye el instrumento de gestión adecuado para que cada universidad pueda iniciar un procedimiento de licenciamiento respecto de los programas de doctorado que considere necesarios.

- No corresponde a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte realizar los cambios a los requisitos para ser rector sin que hubiera ni siquiera un modelo de calidad de la enseñanza superior universitaria en las modalidades semipresencial y a distancia.

Por lo tanto, estando a las razones expuestas que explican su inviabilidad fáctica y jurídica, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte considera que la propuesta de ley bajo análisis no es de recibo.

IV. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, de conformidad con el literal c) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la **NO APROBACIÓN** del Proyecto de Ley 810/2021-CR, y su envío al archivo.

Dese cuenta.
Sala de Comisiones.
Lima, 11 de enero de 2023

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 08:07:09-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CRUZ MAMANI Flavio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 09:32:10-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: INFANTES CASTAÑEDA Mery Eliana FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 10:36:27-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 11:24:20-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RIVAS CHACARA Janet Milagros FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/01/2023 10:25:20-0500

CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 24 **de** marzo **de** 2023

Con acuerdo del Consejo Directivo,

pasó al archivo.—

HUGO F. ROVIRA ZAGAL
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 810/2021-CR, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA EL NUMERAL 61.3 DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 30220, LEY UNIVERSITARIA

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CASTILLO RIVAS Eduardo Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 11:46:43-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RAMIREZ GARCIA Tania Estefany FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 12:34:35-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GUTIERREZ TICONA Paul Silvio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 14:39:00-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: HUAMAN CORONADO Raul FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 17:47:59-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CHIABRA LEON Roberto Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 15:11:17-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CORDERO JON TAY Maria Del Pilar FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/01/2023 11:18:35-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORI CELIS Juan Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/01/2023 11:35:07-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: HERRERA MEDINA Noelia Rossvith FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/02/2023 15:45:41-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORI CELIS Juan Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26/01/2023 11:35:27-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SANCHEZ PALOMINO Roberto Helbert FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/01/2023 12:46:34-0500

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
(SESIÓN SEMIPRESENCIAL)
MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023

Presidida por la congresista Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga

A las 15 horas y 12 minutos en el Hemiciclo de Sesiones del Palacio Legislativo, se pasó lista[1] a la que contestaron, de manera presencial, los congresistas Flavio Cruz Mamani, Alex Antonio Paredes Gonzales y Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (miembros titulares); y, de manera virtual, a través de la Plataforma Microsoft Teams, los congresistas Wilson Rusbel Quispe Mamani, Juan Carlos Mori Celis, María del Pilar Cordero Jon Tay, Raúl Huamán Coronado, Mery Eliana Infantes Castañeda, Tania Estefany Ramírez García, Roberto Chiabra León y José Luis Elías Ávalos (miembros titulares).

Con LICENCIA las congresistas Flor Aidee Pablo Medina y Karol Ivett Paredes Fonseca (miembros titulares).

Con el *quorum* de Reglamento, la **PRESIDENTA** inició la sesión.

Se dejó constancia de la dispensa presentada por el congresista Esdras Ricardo Medina Minaya (miembro titular).

—o0o—

I. ORDEN DEL DÍA

En este estado, la **PRESIDENTA** anunció que correspondía escuchar la sustentación a cargo del congresista Waldemar José Cerrón Rojas, como autor del Proyecto de Ley 3886/2022-CR, en virtud del cual se propone la Ley que modifica los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 31495, Ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada.

[1] Durante el desarrollo de la sesión, se unieron, de manera virtual, los congresistas Eduardo Enrique Castillo Rivas, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Janet Milagros Rivas Chacara, Roberto Helbert Sánchez Palomino y Noelia Rossvith Herrera Medina (miembros titulares).

Con ese fin, le ofreció el uso de la palabra.

El congresista **CERRÓN ROJAS** comentó que el proyecto de ley tiene por objeto reconocer el derecho de los docentes cesantes, jubilados, activos, contratados, auxiliares y herederos legales de los servidores fallecidos, en sede administrativa, así como contrarrestar la asimetría e inequidad de sueldos y prosecución del salario justo y digno del trabajador docente.

Explicó que la modificación de los artículos 1, 2, 3 de la Ley 31495 propone incluir a los docentes jubilados, auxiliares y herederos legales de los servidores fallecidos, en sede administrativa como beneficiarios de las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificada por la Ley 25212, tomando como base la remuneración total sin exclusión de conceptos remunerativos.

Seguidamente, agregó que en el artículo 1 modificado se agrega un párrafo que dispone que la liquidación de dichas bonificaciones se realiza determinando su valor actualizado empleando la tasa de interés legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 1236 del Código Civil correspondiente al periodo comprendido entre el inicio de cada beneficio hasta la fecha de su liquidación. A su vez, agregó que en el artículo 3 modificado se señala que a los servidores cesantes del Decreto Ley 20530, por su condición especial, se les aplica desde el 21 de mayo de 1990 hasta la actualidad lo dispuesto, y la modificación de su estructura remunerativa pensionaria, considerando, además, la remuneración de viceministro de Estado para quienes alcanzaron el V Nivel Magisterial.

Sobre la incorporación del artículo 7 a la Ley 31495, dijo que se plantea que los años de contrato deban ser contabilizados como años de servicios que se acreditan con las planillas de remuneraciones de los servidores, sobre los que se aplica el reconocimiento y pago de las bonificaciones establecidas en la presente disposición normativa propuesta, sin ninguna otra condición.

Indicó que el proyecto de ley incorpora, también, la tercera disposición complementaria, la cual deja sin efecto el artículo 134.3 del Decreto Supremo 004-2013-ED, en el extremo que precisa que no son considerados como años de servicios las resoluciones por reconocimiento de pago.

Sostuvo que el Poder Judicial adoptó criterios que excluyeron conceptos remunerativos "por ley expresa", ordenando y aprobando peritajes judiciales con liquidaciones reducidas, basándose en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley 31495. Señaló que dichas decisiones administrativas y judiciales vulnera el principio de legalidad e interpretación favorable al trabajador, toda vez

que resultan contrarias a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado, el cual no establece la exclusión de conceptos remunerativos por ley expresa.

Por otro lado, mencionó que la Corte Suprema ha establecido que el beneficio de bonificación especial por preparación de clase y evaluación debe ser calculado en función a la remuneración total o íntegra, es decir, todos los ingresos percibidos mensualmente por el docente.

Dijo que existe una amplia jurisprudencia que otorga el marco legal suficiente para la aprobación de lo dispuesto en el proyecto de ley y puso como ejemplo la Casación N° 5318-2016-LIMA de la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema que reitera no solo el criterio uniforme para el cálculo de la bonificación, sino también establece que la sentencia favorece procesalmente a la parte demandante, por lo cual queda descartado que la remuneración se vea reducida.

Terminada la exposición, la **PRESIDENTA** ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

El congresista **CRUZ MAMANI** señaló que el Ministerio de Educación aún no ha reglamentado la Ley 31495, lo que podría ser una ventaja para realizar unos ajustes a la norma.

De otro lado, comentó que el Ministerio de Economía y Finanzas se basa en el Informe Legal N° 524 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para reconocer o no si el docente realmente es merecedor de recibir las bonificaciones que les corresponde. Advirtió que, a pesar de haber sido más de 10 años de encontrarse en esta situación, ni SERVIR, ni el Poder Ejecutivo han brindado alguna norma legal vinculante para decidir sobre este tipo de casos.

Sugirió revisar bien los términos que se incluyen en el texto legal al momento de elaborar el predictamen en referencia a los retirados, cesados, jubilados y otros grupos de docentes que pueden terminar viéndose excluidos de los beneficios de la ley.

Por su parte, el congresista **PAREDES GONZALES** dijo que más de 12 mil docentes de la región Arequipa, la cual representa, hicieron el reclamo correspondiente y han recibido sus beneficios luego de un largo proceso judicial. Comentó que, en ese contexto, la Ley 31495, por más que busca facilitar el pago de beneficios a los docentes, no fue reglamentada en el plazo otorgado, lo cual brinda una oportunidad para realizar ajustes a la redacción del texto legal.

Informó que el grupo de trabajo que coordina ha trabajado progresivamente para resolver los problemas y limitaciones de lo dispuesto por la norma y señaló que se

había programado una reunión con representantes del Ministerio de Educación para reglamentar la Ley 31495.

La **PRESIDENTA** explicó que con la Ley 31495 se unificaron todas las bonificaciones para que pasen a formar parte de la remuneración del docente.

El congresista **PAREDES GONZALES** precisó que la dación de la Ley 31495 se logró para evitar que los docentes interpongan una acción judicial, toda vez que, dada la jurisprudencia previa, el resultado sería beneficioso para el demandante. A su vez, señaló que, de acuerdo con la opinión de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ello coadyuvaría a aliviar la carga procesal.

La **PRESIDENTA** consultó cuál sería el objeto de reglamentar una norma si, con la aprobación de la Ley 31495, se entiende que las bonificaciones se subsumen en el sueldo mensual y se modifica la remuneración total.

El congresista **PAREDES GONZALES** manifestó que precisamente ello es lo que se debe precisar, toda vez que se hacen interpretaciones unilaterales de lo dispuesto en la ley.

La **PRESIDENTA** dijo que con la aprobación del proyecto de ley sustentado se estaría creando una nueva bonificación y que es necesario analizar la propuesta más a fondo a fin de dar una solución viable para el problema comentado.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista anunció que el proyecto de ley seguiría el trámite de Reglamento.

—o0o—

Continuando, la **PRESIDENTA** manifestó que conforme al orden de la agenda correspondía escuchar a la congresista Margot Palacios Huamán, quien sustentaría el Proyecto de Ley 1049/2021-CR de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley de creación de la Universidad Nacional Científica Intercultural del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro; sin embargo, anunció que la legisladora había presentado una solicitud para reprogramar su presentación, por lo que prosiguió con el siguiente punto de la agenda.

—o0o—

La **PRESIDENTA** dijo que correspondía escuchar la sustentación del congresista Guido Bellido Ugarte del Proyecto de Ley 1565/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley que crea la Universidad Nacional del VRAEM.

Con ese fin, le ofreció el uso de la palabra.

El congresista **BELLIDO UGARTE** señaló que el proyecto de ley es una demanda legítima que beneficiaría a los habitantes de las regiones Cusco, Ayacucho, Junín, Huancavelica y Apurímac, las que tienen pocas vías de comunicación con el resto del país y que fueron consideradas como ámbito de aplicación de la Estrategia Nacional de Crecimiento en el año 2007.

Expuso que el proyecto de ley tiene por objeto regular la creación e implementación progresiva de la Universidad Nacional del VRAEM, con personería jurídica de derecho público interno, con sede en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en la ciudad de Pichari, provincia de La Convención, departamento del Cusco.

Explicó que se ha propuesto al distrito de Pichari como localidad en la que se encontraría la Universidad Nacional del VRAEM debido a que pertenece al área de intervención directa del VRAEM, cuenta con diversas vías y canales de comunicación, es uno de los distritos con mayor número de habitantes en su área de influencia, colinda con otros distritos que tienen una amplia demanda de acceso a la educación superior y su posición geográfica le permite ser el centro económico comercial de la zona.

Comentó que solo un pequeño porcentaje de la población ha podido acceder a estudios de educación superior universitaria, lo cual ha generado que se incrementen los índices de migración de esta zona a otras partes del país con mejores oportunidades.

Solicitó el apoyo de los señores congresistas para la aprobación del predictamen correspondiente, toda vez que la creación de universidades promete mejorar las condiciones de vida de las personas que se ven beneficiadas. Asimismo, pidió a la Presidenta atender lo solicitado en el Oficio N° 808-2022-2023-GBU/CR, de fecha 3 de enero de 2023, para la programación de sustentación de los proyectos de ley 1176/2021-CR, 1945/2021-CR, 2620/2021-CR y 2619/2021-CR.

La **PRESIDENTA** dijo que se realizarían las coordinaciones para atender lo solicitado y comentó que existen las iniciativas 3517/2022-CR y 1049/2021-CR con contenido similar al proyecto sustentado que difieren en la ubicación en la que se encontraría la Universidad Nacional del VRAEM. Pidió a los señores congresistas debatir dicho aspecto de la propuesta para lograr un consenso.

Seguidamente, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista agradeció la presentación realizada y anunció que el proyecto de ley seguiría el trámite de Reglamento.

—o0o—

A continuación, la **PRESIDENTA** anunció que, de acuerdo con lo programado en la agenda, correspondía escuchar la sustentación del congresista Wilson Soto Palacios del Proyecto de Ley 3517/2022-CR, de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la "Universidad Nacional Autónoma del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro – UNAVRAEM".

Manifestó que el congresista Wilson Soto Palacios no se encontraba conectado en la plataforma de sesiones virtuales del Congreso en esos momentos y que se coordinará con su despacho a los efectos de reprogramar su presentación.

Dicho esto, continuó con el siguiente punto de la agenda.

—o0o—

Seguidamente, la **PRESIDENTA** anunció que la congresista María Elizabeth Taipe Coronado, quien debía sustentar el Proyecto de Ley 1919/2021-CR de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de techos en los espacios abiertos de los centros de educación básica regular del país, ha solicitado la reprogramación de la sustentación debido a actividades parlamentarias previamente agendadas; con ese fin, dispuso se coordine con el despacho de la citada parlamentaria.

—o0o—

En este estado, la **PRESIDENTA** anunció que correspondía escuchar la sustentación de la congresista Noelia Rossvith Herrera Medina del Proyecto de Ley 2932/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación de la Universidad Nacional de Marañón en el departamento de Huánuco.

Con dicha finalidad, le ofreció el uso de la palabra.

La congresista **HERRERA MEDINA** señaló que el proyecto de ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación de la Universidad Nacional de Marañón, con sede en la provincia de Marañón, departamento de Huánuco.

Dijo que el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno Regional de Huánuco y la Municipalidad Provincial de Marañón, con cargo a su presupuesto anual, deben promover el desarrollo de los estudios técnicos para la construcción de la referida universidad y su inclusión dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.PE.

Explicó que actualmente existe en Huánuco la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, sin embargo, su ubicación dificulta el acceso a la población que reside en zonas alejadas y ello genera costos adicionales como alojamiento, alimentación y traslados, además de los materiales de estudio que los universitarios, de por sí, ya deben cubrir.

Precisó que la provincia de Marañón cuenta con más de 26 mil habitantes, de acuerdo con el Censo Nacional realizado en el 2017, por lo cual, crear una universidad ubicada en esta provincia responde a una demanda legítima de la población del Marañón, pues reclama acceso a la educación superior para mejorar sus condiciones de vida y contar con mayores oportunidades de empleo.

Indicó que el proyecto de ley sustentado no irroga gastos al erario nacional y busca promover la inclusión de los ciudadanos a la educación superior universitaria para disminuir las brechas de pobreza.

La **PRESIDENTA** agradeció la exposición realizada y ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista anunció que el proyecto de ley seguiría el trámite de Reglamento.

—o0o—

A continuación, la **PRESIDENTA** anunció que correspondía debatir y votar el predictamen recaído en los proyectos de ley 2394/2021-CR, 2458/2021-CR y 3900/20322-CR, en virtud del cual se propone la Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la "Universidad Nacional Tecnológica de Chincha - UNATECH" de la provincia de Chincha del departamento de Ica.

Sostuvo que los proyectos de ley indican que es de suma importancia la creación e implementación de una universidad pública en la provincia de Chincha, departamento de Ica, toda vez que el crecimiento demográfico y la expansión de la oferta de empleo han mostrado la necesidad de contar con una institución de educación superior de calidad.

Así también, precisó que, según el Censo Nacional del año 2017, la provincia de Chincha tiene 250 mil habitantes, de los cuales aproximadamente el 70% tiene más de 15 años y conforma un grupo que, potencialmente, buscará oportunidades de desarrollo.

Explicó que el cumplimiento íntegro de los requisitos vigentes corresponde a la creación de una universidad pública y no es exigible a las normas declarativas, debido a que en estas se verifica la pertinencia de la creación de una universidad pública, aspecto vinculado a la necesidad de la población y la oferta de empleo que no se cubre por la falta de personal calificado.

Indicó que solo el 34% de la población de Chincha accede a educación superior y que, ante la denegatoria de licencias a las universidades por parte de la SUNEDU, el departamento de Ica solo cuenta con dos universidades licenciadas, las cuales no tienen sede en la provincia de Chincha.

Por lo expuesto, consideró razonable la aprobación de la propuesta que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la "Universidad Nacional Tecnológica de Chincha – UNATECH".

En debate el predictamen, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

El congresista **MUÑANTE BARRIOS** señaló que el fondo de la propuesta es beneficiar a un gran sector de la población de la localidad de Chincha, toda vez que un mínimo porcentaje del total de habitantes tiene la oportunidad de acceder a la educación superior. Por otro lado, mencionó que la provincia de Chincha se encuentra en desventaja en comparación con otras localidades que cuentan con más de una universidad, sea pública o privada. Finalmente, precisó que la aprobación de la iniciativa legislativa no conlleva gasto público al ser una norma declarativa, ni contraviene ninguna disposición legal.

Por su parte, el congresista **MARTICORENA MENDOZA** agradeció el trabajo realizado por la Comisión, toda vez que la propuesta refleja una necesidad que viene siendo reclamada desde hace varios años por la provincia de Chincha.

A su turno, la congresista **HERRERA MEDINA** señaló estar de acuerdo con la propuesta trabajada por la Comisión.

El congresista **ELÍAS ÁVALOS** advirtió que las leyes declarativas son leyes vacías, intrusas y simbólicas, lo cual está establecido en manuales internos del Congreso

de la República. Manifestó que no se puede incluir en el dictamen información que no es cierta.

En una nueva intervención, la congresista **HERRERA MEDINA** afirmó que las iniciativas de ley declarativos son necesarias para impulsar proyectos que requieren inversión y planificación. Cuestionó la observación realizada por el congresista Elías Ávalos dado que, en el caso del citado congresista, dijo, puede haber un conflicto de intereses con la aprobación del dictamen en comentario.

El congresista **ELÍAS ÁVALOS** explicó que, en su momento, el Proyecto de Ley 124/2011-CR, de autoría de la exparlamentaria Ana Jara, fue actualizado con la numeración 373/2016-CR y aprobado en una sesión descentralizada realizada en Ica. Asimismo, comentó que la aprobación de un proyecto de ley que declara de necesidad pública la creación de una universidad debe contar con la opinión previa favorable de los ministerios de Educación y de Economía y Finanzas, así como con los instrumentos de planeamiento para la creación de una institución de educación superior. Señaló que no se ha detallado cómo se garantizará la conveniencia y pertinencia con las políticas regionales y nacionales de educación universitaria, tampoco la vinculación de la oferta educativa propuesta a la demanda laboral, no se ha demostrado la disponibilidad de recursos humanos y económicos para el inicio y sostenibilidad de las actividades proyectadas. Dijo que la propuesta contraviene el artículo 78 y 79 de la Constitución Política del Perú, toda vez que el cumplimiento de las ocho condiciones básicas de calidad dispuestas por la SUNEDU significa el desembolso de recursos públicos.

Por otro lado, agregó que el Ministerio de Economía y Finanzas emitió opinión desfavorable sobre el proyecto de ley. Expresó su preocupación por el análisis territorial contenido en el predictamen que no considera necesario el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y, sin embargo, ordena al Ministerio de Educación que el cumplimiento de estas será efectivo al momento de la implementación de lo dispuesto en la norma.

Dijo que, en el punto 3.2 del análisis del predictamen se argumenta que en el departamento de Ica solo tiene licenciamiento la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y la Universidad Privada San Juan Bautista; sin embargo, actualmente se encuentran funcionando en la provincia de Chincha sedes de la Universidad San Luis Gonzaga, de la Universidad Privada de Ica y de la Universidad Privada San Juan Bautista.

Observó que hay errores de redacción en las palabras "patente" y "Chincha" en el punto 3.4 del análisis del predictamen y en el artículo único del texto legal de la propuesta, respectivamente.

La **PRESIDENTA** señaló que no comparte los criterios referidos por el congresista José Luis Elías Ávalos sobre la esencia de los proyectos de ley declarativos, toda vez que ponen en agenda una necesidad de una comunidad que, en este caso, está ávida de tener un centro de estudios superiores. No obstante, agradeció las observaciones que buscan mejorar el trabajo realizado por la Comisión.

El congresista **ELÍAS ÁVALOS** explicó que hubo una mala interpretación de sus palabras toda vez que lo señalado se encuentra en el Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República.

El congresista **MARTICORENA MENDOZA** dijo que, por lo comentado, habría algún interés particular en observar el predictamen. Manifestó que todos los proyectos de ley declarativos reflejan las demandas de una población y son solo el primer paso para la posterior implementación de este. Aclaró que no se puede negar que todas las universidades deben cumplir con las condiciones básicas de calidad establecidas por la SUNEDU; sin embargo, por el momento no es pertinente abordar ese punto toda vez que el proyecto de ley se limita a declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de una universidad. Solicitó someter el predictamen al voto.

El congresista **ELÍAS ÁVALOS** negó la existencia de algún conflicto de interés y adelantó su voto a favor de la propuesta; aun así, dijo que es importante corregir las observaciones formuladas a fin de mejorar los aspectos técnicos analizados.

El congresista **QUISPE MAMANI** manifestó que elaborar proyectos de ley declarativos es obligación de todos los congresistas, dado que estos exponen las necesidades de un sector de la población. Recordó a los presentes que lo propuesto en las iniciativas legislativas no deben significar el uso de recursos públicos, de conformidad con el artículo 79 de la Constitución Política del Perú; sin embargo, sí se puede declarar la necesidad de implementar un proyecto, de acuerdo con lo que la población solicita.

El congresista **HUAMÁN CORONADO** consideró que los proyectos de ley declarativos son un llamado de atención a otras instancias del Estado para que, en su momento, se pueda ejecutar lo dispuesto en la norma.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista, la **PRESIDENTA** dio por agotado el debate y con los aportes brindados sometió el dictamen a votación.

El predictamen fue aprobado por unanimidad de los congresistas asistentes.

"Votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 2394/2021-CR, 2458/2021-CR y 3900/2022-CR

Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani, Mori Celis, María del Pilar Cordero Jon Tay, Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Chiabra León, Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina, Elías Ávalos y Marticorena Mendoza (miembros titulares)".

—o0o—

Continuando con lo programado en la agenda, la **PRESIDENTA** anunció que correspondía debatir y votar el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 810/2021-CR, en virtud del cual se propone la Ley que modifica el numeral 61.3 del artículo 61 de la Ley 30220, Ley Universitaria.

Señaló que la propuesta busca modificar el artículo 61 del Decreto Legislativo 1496 con la finalidad de que el requisito para ser elegido rector de una universidad que consiste en haber obtenido el grado de doctor bajo la modalidad presencial, sea ampliado a las modalidades semipresencial o a distancia y, además, incorpora el requisito de contar con una trayectoria de investigación.

Indicó que la propuesta no resulta atendible toda vez que no se cuenta con una fundamentación fáctica y jurídica, debido a que sería necesario modificar los requisitos similares para ser superintendente nacional de la SUNEDU, vicerrector, decano y profesor ordinario principal; es decir, no se advierte el universo de beneficiarios de la referida iniciativa legislativa ni el problema que se pretende resolver con la aprobación de esta iniciativa legal.

De otro lado, dijo que el estándar 10 del Modelo de Calidad para la Acreditación de Programas de Estudios de Posgrado, elaborado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación - SINEACE, dispone que el programa de doctorado debe contar con mecanismos que aseguren, entre otros, la pertinencia y la disponibilidad de recursos bibliográficos (físicos o digitales) con una antigüedad no menor de cinco años; por lo cual, un programa de doctorado a distancia tendría que asegurar la disponibilidad de recursos bibliográficos físicos al alumno o el acceso a bases de datos de prestigio internacional a través de convenios y del correspondiente pago de los derechos de uso.

Por lo expuesto, recomendó la no aprobación del Proyecto de Ley 810/2021-CR.

A continuación, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista, dio por agotado el debate y sometió a votación el predictamen en sus mismos términos.

El predictamen fue aprobado por mayoría.

"Votación[2] del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 810/2021-CR

Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Izaga, Mori Celis, Castillo Rivas[3], María del Pilar Cordero Jon Tay, Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Rivas Chacara, Chiabra León, Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina y Sánchez Palomino[4] (miembros titulares).

Congresista que votó en abstención: Elías Ávalos (miembro titular)".

—o0o—

A continuación, La **PRESIDENTA** anunció que correspondía debatir y votar el predictamen recaído en los proyectos de ley 1912/2021-CR y 2310/2021-CR, en virtud del cual se propone la Ley que modifica el artículo 11 de la Ley 28238, Ley General del Voluntariado, a fin de reconocer con créditos académicos en los estudios de pregrado universitarios al voluntariado certificado.

Explicó que diversas universidades han diseñado sus currículos incluyendo actividades de proyección social, las cuales en realidad son voluntariados organizados por las propias casas de estudio, en cuyo caso los estudiantes pueden realizarlas a cambio de créditos académicos; sin embargo, la acreditación de voluntariados por créditos académicos no aplica para las labores de voluntariado certificadas por otras organizaciones públicas o privadas.

Señaló que existe un antecedente en el Proyecto de Ley 7747/2020-PE, cuyo texto legal establecía el canje de horas de voluntariado por créditos académicos de cursos electivos durante los estudios de pregrado universitario, incluyendo la formación técnico productiva y superior tecnológica. Indicó que dicha propuesta acoge las recomendaciones dadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución A/RES/56/38 del 10 de enero de 2002, relacionadas al apoyo al voluntariado por parte de los gobiernos.

Por lo expuesto, solicitó el voto a favor del predictamen que eleva a norma con rango de ley el beneficio de obtener puntaje adicional en la fase de preselección de las

[2] Finalizada la sesión, el congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, mediante Oficio 482-2022-2023/JAMM-CR, del 13 de enero de 2023, dejó constancia de su voto en contra.
[3] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[4] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

becas nacionales e internacionales que administra el Pronabec e incorpora el beneficio de reconocer con créditos académicos en los estudios de pregrado universitarios a las labores de voluntariado que estén debidamente certificados por una organización supervisada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Precisó que la SUNEDU debe velar por la mejor vía de aplicación de lo dispuesto.

Luego de que, a su solicitud, el secretario técnico diera lectura al texto legal propuesto, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

La congresista **INFANTES CASTAÑEDA** solicitó precisar la redacción del inciso b) del artículo 10 de la Ley del Voluntariado, reemplazando el término "canjear" por "reconocer", toda vez que el espíritu de la norma es reconocer las horas de voluntariado como créditos académicos de pregrado. En dicho sentido, sugirió colocar en el texto legal "el reconocimiento de" las horas de voluntariado debidamente acreditadas con créditos académicos de cursos electivos durante los estudios de pregrado universitario en la formación técnico-productivo y superior-tecnológico, de acuerdo con lo establecido en los respectivos reglamentos académicos o de estudios que cada institución educativa haya establecido en el marco de su autonomía.

La **PRESIDENTA** aceptó la sugerencia formulada.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista, dio el debate por agotado y sometió el predictamen al voto.

El predictamen fue aprobado por mayoría.

"Votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 1912/2021-CR y 2310/2021-CR

Congresistas que votaron a favor[5]: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani, Mori Celis, María del Pilar Cordero Jon Tay, Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Chiabra León, Paredes Gonzales y Gutiérrez Ticona (miembros titulares).

Congresistas que votaron en abstención: Rivas Chacara y Elías Ávalos (miembros titulares)".

—o0o—

[5] Finalizada la sesión, el congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, mediante Oficio 482-2022-2023/JAMM-CR, del 13 de enero de 2023, dejó constancia de su voto a favor.

A continuación, la **PRESIDENTA** anunció que correspondía debatir y votar el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2588/2021-CR, en virtud del cual se propone la Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés la creación, la construcción y la implementación de los Colegios de Alto Rendimiento Deportivo – COARD.

Al respecto, sostuvo que el proyecto de ley busca garantizar una formación de excelencia a los estudiantes con desempeño sobresaliente en determinadas disciplinas específicas que no son tradicionalmente atendidas por la educación básica regular, utilizando una pedagogía que permita generar una relación entre el deporte y los cursos básicos a través de actividades interdisciplinarias.

Señaló que la Política Nacional del Deporte, aprobada por el Decreto Supremo 003-2017-MINEDU, tiene como objeto establecer lineamientos para la masificación y divulgación de la actividad deportiva, mejorando el desempeño deportivo del país y mejorando la calidad de vida de la sociedad; sin embargo, advirtió, este documento de gestión no contiene acciones objetivas que planteen intervenciones para revertir los problemas identificados en el diagnóstico, cuya evidencia es el bajo rendimiento de los equipos deportivos nacionales en competencias internacionales, pues no se cuenta con deportistas calificados de alto nivel.

Por lo anteriormente señalado, indicó que se busca replicar la experiencia positiva de los colegios de alto rendimiento COAR y declarar la necesidad pública y de preferente interés nacional para construir e implementar Colegios de Alto Rendimiento Deportivo y brindar el servicio educativo a estudiantes de alto desempeño deportivo desde el tercer año del Nivel Secundario de la Educación Básica Regular de todas las regiones del país. Asimismo, dijo que se dispone la elaboración de un Plan Nacional del Deporte, que observe la Política Nacional del Deporte aprobada por Decreto Supremo 003-2017-MINEDU, a fin de establecer los objetivos, estrategias, acciones y métodos de control de la referida política.

De conformidad con lo expuesto, solicitó el voto a favor del predictamen sustentado.

Seguidamente, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista, dio por agotado el debate y sometió la propuesta al voto.

El predictamen fue aprobado por mayoría.

"Votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2588/2021-CR

Congresistas que votaron a favor[6]: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani, Mori Celis, María del Pilar Cordero Jon Tay, Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Rivas Chacara, Chiabra León, Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona y Sánchez Palomino[7] (miembros titulares).

Congresista que votó en abstención: Elías Ávalos (miembro titular)".

—o0o—

En este estado, la **PRESIDENTA** anunció que, de acuerdo a lo establecido en la agenda, correspondía someter a debate y votación el predictamen recaído en los proyectos de ley 1049/2021-CR, 1565/2021-CR y 3517/2022-CR, en virtud del cual se propone la Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la "Universidad Nacional del VRAEM - UNVRAEM".

Al respecto, dado que no se concretó la sustentación de dos de los proyectos de ley acumulados y que ellos difieren en la ubicación en la que se encontraría la Universidad Nacional del VRAEM, dispuso que este punto de la agenda sea abordado en una próxima sesión.

—o0o—

Seguidamente, la **PRESIDENTA** sometió a consulta el acta de la presente sesión con dispensa de su lectura.

No habiendo ninguna oposición la dio por aprobada

—o0o—

II. CIERRE DE LA SESIÓN

Después de lo cual, la **PRESIDENTA** levantó la sesión.

Eran las 17 horas y 56 minutos.

---

[6] Finalizada la sesión, el congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, mediante Oficio 482-2022-2023/JAMM-CR, del 13 de enero de 2023, dejó constancia de su voto a favor.
[7] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/01/2023 08:08:29-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: MORI CELIS Juan Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/01/2023 11:25:03-0500

.....
GLADYS MARGOT ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA
PRESIDENTA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTIUD Y DEPORTE

.....
JUAN CARLOS MORI CELIS
SECRETARIO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, del periodo anual de sesiones 2022-2023, que elabora el Área de Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta.